



SALA UNIPERSONAL DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	Verbal – Impugnación actas de asamblea
DEMANDANTE	María Edilma González Espinosa
DEMANDADO	Edificio San Charbel P.H.
DECISIÓN	Revoca auto apelado
RADICADO	05001 31 03 007 2023 00149 01

Medellín, tres de agosto de dos mil veintitrés

El despacho resuelve lo pertinente sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

1.1. Mediante auto de 29 de mayo de 2023, el Juzgado 013 Civil del Circuito de Medellín rechazó la demanda presentada por María Edilma González Espinosa frente al Edificio San Charbel P.H. Como fundamento de la decisión, tuvo en consideración que no se subsanó la demanda, porque en primer lugar, no se esclareció el hecho 14 del libelo genitor, en el sentido de precisar el año del acta a la que se refería dicho numeral; en segundo lugar, no se adicionó la pretensión primera, pues no se especificó las determinaciones adoptadas en la asamblea que se pretendía dejar sin efectos; en tercer lugar, no se determinó en la pretensión subsidiaria cuáles eran los puntos 7, 8, 9 y 10 de la asamblea, de los cuales se pretendía la nulidad; de otra parte, no se aportó la constancia del mensaje de datos mediante el cual se confirió el poder o la presentación personal del mismo; y finalmente, no se acreditó el envío de la demanda y sus anexos simultáneamente con la presentación de la misma.

1.2. Inconforme con tal resolución, el apoderado de la parte demandante interpuso el recurso de reposición y en subsidio apelación. Solicitó reponer la decisión o en su defecto conceder la alzada.

Como sustento de la inconformidad, expuso que la redacción del hecho 14 era clara porque le antecedian los yerros que condujeron a la nulidad de la asamblea y, por ende, del acta de la reunión de 2023, lo que aparecía diáfano en el hecho primero. De igual modo, sostuvo que la pretensión primera de la demanda, buscaba la nulidad de todas las decisiones contenidas en el acta de asamblea. Así mismo, señaló que la exigencia de constancia de que la demandante sí confirió el poder, se apega a una formalidad excluyente del mandato, pues al enviar el correo al juzgado para atender el auto inadmisorio, se utilizó el correo remitido por la poderdante y al mismo tiempo se la incluyó como destinataria, ello aunado a que, en el poder se incorporó el correo de la demandante y del mandatario. Por otro lado, expuso que, al enviar el correo al juzgado con la subsanación de la demanda, de manera simultánea, se incluyó entre los destinatarios los dos correos electrónicos indicados por el representante legal de la sociedad administradora de la P.H. demandada.

1.3. En auto de 6 de junio de 2023, el juzgado de primera instancia resolvió el recurso de reposición de manera desfavorable, por lo cual, mantuvo incólume la decisión y concedió la alzada.

Como razones de la decisión, señaló que el extremo procesal demandante volvió a mencionar en el hecho 14 que se trata del acta de asamblea de 2022, lo que conlleva al mismo error y genera confusión frente a la asamblea que se cuestiona. De otro lado, definió que la parte demandante al utilizar la expresión “todas” en la pretensión primera, denota una carencia de fundamento fáctico, pues no se encuentran determinadas las decisiones adoptadas en la asamblea y que se pretendía impugnar en su totalidad; ahora, en el escrito de subsanación se incluyó una pretensión subsidiaria que se limitó a mencionar que se declarara la nulidad de las determinaciones de los puntos 7, 8, 9 y 10, sin especificar a qué decisiones se hacía referencia en esos numerales. En relación con el poder, concluyó que no cumplía con los requisitos de que trata el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022, pues no se acompañó la prueba de haberse enviado desde la dirección electrónica del poderdante. Por último, precisó que de la observación del mensaje mediante el cual se presentó la subsanación de la demanda, se evidenció el envío del escrito respectivo el 25 de mayo de 2023 a los correos

electrónicos del administrador de la P.H. demandada, sin embargo, no se remitió la demanda inicial y sus anexos de manera simultánea.

CONSIDERACIONES

2.1. El artículo 82 del Código General del Proceso establece los requisitos formales de la demanda. Al respecto, la norma en lo que aquí concierne señala:

"ARTÍCULO 82. REQUISITOS DE LA DEMANDA. Salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos:

....

4. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad.

5. Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.

...

11. Los demás que exija la ley.

...

2.2. Por su parte, el artículo 90 ibídem prevé las causales de inadmisión y rechazo de la demanda.

"ARTÍCULO 90. ADMISIÓN, INADMISIÓN Y RECHAZO DE LA DEMANDA. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. En la misma providencia el juez deberá integrar el litisconsorcio necesario y ordenarle al demandado que aporte, durante el traslado de la demanda, los documentos que estén en su poder y que hayan sido solicitados por el demandante.

El juez rechazará la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia o cuando esté vencido el término de caducidad para instaurarla. En los dos primeros casos ordenará enviarla con sus anexos al que considere competente; en el último, ordenará devolver los anexos sin necesidad de desglose.

Mediante auto no susceptible de recursos el juez declarará inadmisibile la demanda solo en los siguientes casos:

1. Cuando no reúna los requisitos formales.

...

En estos casos el juez señalará con precisión los defectos de que adolezca la demanda, para que el demandante los subsane en el término de cinco (5) días, so pena de rechazo. Vencido el término para subsanarla el juez decidirá si la admite o la rechaza.

..."

2.3. Respecto a los hechos de la demanda y su interpretación, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia STC 14160 de 2019 definió lo siguiente:

"Así, la jurisprudencia ha establecido que ante situaciones en las cuales aparece que el libelo es oscuro o ambiguo, debe el juez interpretarlo. En tal virtud, expresa: «[u]na demanda [o solicitud] debe interpretarse siempre en conjunto, porque la intención del actor está muchas veces contenida no solo en la parte petitoria, sino también en los fundamentos de hecho y de derecho. No existe en nuestra legislación procedimental un sistema rígido o sacramental que obligue al demandante a señalar en determinada parte de la demanda con fórmulas especiales su intención, sino que basta que ella aparezca, ya de una manera directa o expresa, ya por una interpretación lógica basada en todo el conjunto de la [misma]» (cas. civ. Sent. de 15 de noviembre de 1936, gac. XLIV, 527).

Al respecto, esta Sala también ha sostenido que:

En este punto, memórese que el juez tiene el deber de resolver de fondo la controversia puesta a su consideración, teniendo en cuenta el principio fundamental de que sólo ésta limitado a no variar la causa petendi (hechos), pero no así a determinar el derecho aplicable al juicio o a revisar si los presupuestos de cada una de las acciones se cumplen o no, dado que en virtud del principio iura novit curia las partes no tienen la carga de probar el derecho, salvo contadas excepciones como cuando se trata de derecho extranjero o consuetudinario (...)”¹ (énfasis ajeno al original) (CSJ. STC14160-2019 de 16 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03256-00).”

2.4. En relación con el poder otorgado mediante mensaje de datos, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia STC3964 de 2023 precisó lo siguiente:

"Por esa razón, el artículo 5º del citado decreto estableció que «[l]os poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento».

Esto traduce que, a diferencia del criterio plasmado por el juzgado accionado, debe considerarse que el poder tiene un autor conocido (pues a eso apunta la presunción de autenticidad prevista en la citada norma) y será eficaz, siempre que, además de otorgarse a un profesional del derecho, se confiera por mensaje de datos y tenga la antefirma del otorgante, sin necesidad de presentación personal, reconocimiento notarial, firma manuscrita o digital, o envío desde el correo electrónico del poderdante al del apoderado. De ahí que resulte innecesario exigir la prueba de la «trazabilidad», para emplear una palabra de la decisión que motivó el amparo constitucional.”

CASO EN CONCRETO

¹ CSJ. STC14160-2019 de 16 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03256-00.

El recurso de apelación plantea definir si la decisión del juez de rechazar la demanda se debe mantener o si por el contrario como el recurrente sostiene, los requisitos para la admisión de la misma se cumplen.

Al respecto, este despacho advierte que el auto de primera instancia debe ser revocado, porque a partir de una lectura integral de la demanda y los hechos que la soportan, se advierte que los supuestos del rechazo de la demanda, en realidad se encuentran saneados.

En efecto, se tiene que María Edilma González Espinosa en la demanda inicial pretendió la declaratoria de nulidad de la asamblea general de 2023 del Edificio San Charbel P.H., sin embargo en la narración fáctica, específicamente en el hecho 14, se refirió al acta de asamblea de 2022, lo que generó duda al despacho de primer nivel, por ello, en auto de 16 de mayo de 2023, solicitó a la parte demandante aclarar dicho numeral del acápite de los hechos frente al año del acta a la que hizo mención y cumpliera los demás requisitos mencionados. Para subsanar la demanda, el extremo procesal accionante allegó escrito en que expresó: *"como antecedente de errores protuberantes se anota que el acta de la asamblea general del año 2022 no cumplió los requisitos exigidos por el artículo 54 de la Ley 675 de 2001 (elementos del acta) y el artículo 58 (3) estatutario (informar a los propietarios de la publicación del acta)"*. Al respecto, el juzgado de instancia concluyó que no se había subsanado el yerro, debido a que, en el hecho 14 aún se mencionaba el acta de asamblea de 2022, sin que se hubiese explicado si en realidad se trataba de la impugnación de la asamblea llevada a cabo en dicho año o en 2023.

Para dilucidar la controversia planteada frente al rechazo de la demanda basta con traer a consideración que el deber de interpretación de la demanda fuerza a la lectura integral del texto, de tal manera que en este caso la mención que la libelista hizo del acta de asamblea de 2022 como antecedente de los errores en que la asamblea de la copropiedad viene incurriendo, no altera la intención expresada en el resto de la demanda de atacar los actos de asamblea vertidos en el acta de 2023; sobre todo porque cualquier duda que hubiera surgido se aclaraba con el escrito de subsanación en que la pretensora indicó que la nulidad,

como constaba en el hecho primero, apuntaba a los actos de la asamblea de 2023. Así correspondía entonces entenderlo al juez al contrastar como la demandante indicó el dato suministrado en el hecho 14 y el resto de la demanda en cuanto lo anunciado, por la manera como redactó ese hecho es que, así como en la asamblea general de 2023 se incurrió en presuntos vicio, en la asamblea de 2022 ocurrió igual y si se llegare a admitir que existe una confusión en la redacción del hecho, la misma se zanja con lo pretendido por la accionante, pues en efecto se observa que lo que se busca con el libelo genitor es la declaratoria de nulidad de la asamblea de 2023, por lo que la supuesta confusión que el juzgado de primer nivel afirma, queda resuelta con la interpretación de la demanda de manera integral. En línea con lo anterior, es de destacar que el control del juez permite requerir que las expresiones que lo confunden sean aclaradas; pero no puede exigir fórmulas de un rigor sacramental que sacrifiquen el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, sin dejar de lado que el operador jurídico puede interpretar lo dicho siempre y cuando no varíe la *causa petendi* (hechos) en que se fundamentan las pretensiones de la demanda, límite que en este caso permanece incólume.

Por otro lado, el juzgado de instancia exigió que la pretensión primera del escrito inicial fuera aclarada, porque no se especificó a qué se refería al decir "*todas*" frente a las determinaciones adoptadas en la asamblea que se buscaba dejar sin efectos. A este respecto hay que decir que el requerimiento del despacho no permitía el rechazo de la acción frente a todas las decisiones del acta, sino que se debía auscultar de las determinaciones que allí se adoptó cuáles de las decisiones serían susceptibles de ese rechazo desde el inicio pues en relación con aquellas en que la acción puede ser instaurada habría lugar a la admisión. Lo mismo sucede con la pretensión subsidiaria, pues la parte interesada consignó que el en caso de no acoger la nulidad completa de la asamblea se decrete la nulidad de las determinaciones 7, 8, 9 y 10 del orden del día, lo que lleva a verificar a partir de la lectura del acta de asamblea de 2023, frente a cuáles de ellas procede el eventual rechazo.

Ahora, en relación con el poder otorgado se evidencia que el mismo contiene firma manuscrita de la poderdante y que, en virtud de lo establecido por la Sala

Civil de la Corte Suprema de Justicia, dicho acto se presume auténtico. Adicionalmente, se observa que, al momento de remitir el escrito de subsanación a la dirección electrónica del juzgado, se utilizó el correo virtual de la demandante, lo cual refuerza la presunción de autenticidad del poder. Por consiguiente, exigir a la interesada la trazabilidad del mensaje, conllevaría incurrir en un exceso ritual manifiesto.

Finalmente, en lo atinente al envío de la demanda y sus anexos a la parte demandada, procede señalar que dicha circunstancia no configura una causal de rechazo de conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Código General del Proceso, máximo que la subsanación de la demanda fue enviada a los correos de la parte demandada y basta con inspeccionar el escrito para percatarse que en un solo escrito la demandante integró la demanda con las exigencias hechas por el juzgado de primera instancia.

En consecuencia, la decisión proferida en auto de 29 de mayo de 2023 por el Juzgado 007 Civil del Circuito de Medellín será revocada y en su lugar se dispondrá que ese despacho haga el estudio de admisibilidad de la demanda, con especial atención a las consideraciones contenidas en esta providencia.

Por lo expuesto, este despacho RESUELVE:

PRIMERO. REVOCAR el auto de 29 de mayo de 2023, proferido por el Juzgado 007 Civil del Circuito de Medellín y en su lugar, DISPONER que el mismo estudie la admisibilidad de la demanda, con especial atención a las consideraciones contenidas en esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas por cuanto no se causaron.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE


MARTHA CECILIA LEMA VILLADA
Magistrada